

VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores
Instituto de Investigaciones Gino Germani
Universidad de Buenos Aires
4, 5 y 6 de Noviembre de 2015

Sebastián Polischuk

PIMSA // Licenciado en Sociología

sebastianpolischuk@yahoo.com.ar

Patricio Rojze

PIMSA // Licenciado en Sociología

patriciorojze@hotmail.com

Eje 3. Protesta, conflicto y cambio social.

La protesta de la clase obrera de mayo de 1997 en Mosconi y Tartagal

Palabras claves: movimiento obrero, General Mosconi, Tartagal, corte de ruta.

Introducción

En las ciudades salteñas de Tartagal y General Mosconi se llevaron a cabo varios cortes de ruta entre los años 1997 y 2001 que alcanzaron repercusión a nivel nacional, convirtiendo a dichos lugares en un territorio fundamental en lo que respecta a la constitución y desarrollo del llamado “movimiento piquetero” en la Argentina. Junto con los cortes de ruta en las localidades neuquinas de Cutral C6 y Plaza Huincul, en 1996 y 1997, fueron considerados por muchos como hechos fundacionales de un “nuevo actor social”, de una “nueva forma de organización” o de un “nuevo movimiento social”, aspectos que pasaron a ocupar un

espacio central en los debates políticos y académicos a fines de la década de 1990 y principios de la siguiente.

En este artículo comenzamos a describir y analizar el primer corte de ruta ocurrido en mayo de 1997 en Tartagal y General Mosconi, paso inicial para su posterior conceptualización y localización en un proceso más amplio de luchas obreras y populares. En particular centraremos la atención en la forma de organización adoptada por los trabajadores desocupados durante esa protesta, en tanto parte del movimiento obrero, así como en las alianzas establecidas con otras fracciones sociales en el transcurso del corte de ruta.

A raíz de la investigación en curso podemos afirmar que por lo menos esta protesta en particular analizada, permitió poner un límite al alcance de las políticas del capital financiero, destacándose la iniciativa de los trabajadores asalariados (ocupados o desocupados), por su predisposición al enfrentamiento y a continuar con la medida, diferenciándose en sus intereses de las fracciones de propietarios de sus condiciones materiales de existencia.

El hecho investigado ha sido referido por varios autores. Algunos lo han inscripto en el proceso de luchas llevadas adelante por los trabajadores desocupados durante la década de 1990 y han analizado la organización que estos últimos se dieron, pero sin detenerse en la composición social del conjunto de los manifestantes (Benclowicz, 2006). Otros, en cambio, han hecho hincapié en la emergencia de “nuevas identidades” y “nuevos movimientos sociales” a partir del desarrollo de una modalidad de la “acción colectiva”, en la cual los actores logran construir la pertenencia a un “nosotros”, tejiendo entre sí lazos de solidaridad necesarios a partir del debilitamiento de las identidades de clase o partido (Barbetta y Lapegna, 2001) o de la “retirada” del estado y la desarticulación de la economía de enclave local (Svampa et al, 2002). Es por eso que para enriquecer los análisis aportados, en este trabajo hemos decidido focalizarnos en la descripción del hecho, mediante la reconstrucción del mismo tomando fuentes secundarias como periódicos, entrevistas, videos, para poder ampliar el análisis sobre la formas de organización que han adoptado en particular los trabajadores desocupados como parte del movimiento obrero y el

tipo de alianza con otras fracciones sociales dentro de un contexto particular caracterizado por luchas obreras y populares.

El período

El hecho investigado se inscribe en el *proceso de rebelión* que, abarcando diversas formas de protesta y lucha, se inició con el motín ocurrido en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda en diciembre de 1993, para luego extenderse hasta la insurrección espontánea de diciembre de 2001, y a través del cual distintas fracciones sociales libraron enfrentamientos cuyo objetivo fue contener y/o revertir los efectos de las políticas del capital financiero¹.

La rebelión se desarrolló en un *período contrarrevolucionario* iniciado a mediados de la década de 1970 y señalado por la imposición, por medio del uso de la fuerza material del estado, de las condiciones sociales que hacen a la hegemonía del capital financiero, plenamente realizada en la década de 1990. La centralización del capital, la proletarización de una parte de la pequeña burguesía y la pauperización de amplias capas de la clase obrera, el incremento de la productividad del trabajo del sector activo de ésta, así como la generación de una creciente población sobrante para las necesidades del capital, son indicadores de la nueva relación de fuerzas sociales (Iñigo Carrera y Podestá, 1997).

Uno de los rasgos característicos del proceso de rebelión fue la generalización del corte de ruta como instrumento de protesta y de lucha, entendido como la toma y defensa de una posición, y articulado con otras formas tales como huelgas, huelgas generales, movilizaciones callejeras y motines.

A la vez la rebelión contuvo momentos de ascenso y descenso, vistos desde la lucha del movimiento obrero, y determinados de acuerdo a dos series de criterios: la unidad/división de los cuadros sindicales y la articulación/ruptura de alianzas con otras fracciones y/o clases sociales. El hecho investigado se ubicó en el final de un momento de

¹Cabe aclarar que el concepto *protesta* refiere a hechos de conflicto en los que se expresa disconformidad con una situación o política determinada, pero sin poner en cuestión, ni en los discursos ni en las acciones, al régimen político y social vigente. Y *lucha* refiere a hechos en los que aparece la oposición a una situación o política pero en los que además se plantea, de forma potencial o real, el cuestionamiento al régimen social y político y su transformación.

ascenso abierto por el “Santiagazo” de 1993 y que se desplegó hasta agosto de 1997: la unidad en la acción de los cuadros sindicales, la mayor cantidad y adhesión de los trabajadores a las huelgas generales –particularmente en 1995 y 1996- y la articulación de alianzas con otras fracciones de la sociedad lo señalaron (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000).

La base de datos confeccionada por el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) muestra que, entre diciembre de 1993 y agosto de 1997, se llevaron a cabo 156 hechos de conflicto en los que los participantes utilizaron el corte de ruta (o de calle). La mayoría de dichos cortes fueron protagonizados por asalariados, ocupados o desocupados: 84 sobre 156 (el 53,8%). Por otra parte el 69,2% del total de 156 cortes (108), ocurrieron en 1997².

Cabe agregar que en el momento considerado (diciembre de 1993-agosto de 1997) los cortes de ruta llegaron a abarcar prácticamente casi todo el país, salvo las provincias de San Luis, Formosa, Chaco, La Pampa y Catamarca (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000).

El grueso de estas protestas se realizó en zonas con una estructura económico social de *capitalismo de economía privada con peso del campo* (Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza, Tucumán y Río Negro), con 57 cortes sobre un total de 156; en segundo lugar se ubicaron los cortes realizados en la estructura de *capitalismo de economía privada de gran industria y pequeña producción* (Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), con 55 en total; mientras que en tercer término lo hicieron los cortes llevados a cabo en la estructura de *capitalismo de estado en enclaves* (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), con 34 cortes en total.

En cuanto a los objetivos, en buena parte de los cortes (58 sobre 156) refiere a la obtención o preservación de fuentes de trabajo, al tiempo que en 31 la meta lo hace respecto al salario: aumento, cobro de sueldos atrasados, evitar rebajas salariales o impedir el pago a través de bonos. Estos dos tipos de objetivos están presentes en 89 acciones, el 57,1% del total. En cambio, en sólo 35 cortes (22,4%) está presente como objetivo la modificación de las políticas económicas de los gobiernos nacional y/o provinciales; y 23

²Respecto a los sujetos de los cortes, puede agregarse que 24 cortes son organizados por grupos cuya ocupación no está especificada, mientras que de doce no se tienen datos. Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M.; *op. cit.*

cortes dentro de este último grupo se enmarcan en huelgas generales (Iñigo Carrera y Cotarelo, 1998).

Características socioeconómicas y productivas de la zona donde se ubican General Mosconi y Tartagal

Las localidades de General Mosconi y Tartagal forman parte del departamento General San Martín, ubicado en el norte de la provincia de Salta. Según el censo nacional de población de 1991, dicho departamento tenía entonces 106.688 habitantes, es decir el 12,9% del total de la población provincial (866.153 personas), siendo también el segundo más poblado³.

La economía del departamento se basó históricamente en la producción agrícola y ganadera, así como en la del petróleo y el gas. Respecto a la agrícola, tras su expansión en la década de 1970 de la frontera productiva en manos de grandes empresas orientadas particularmente a la soja, el departamento General San Martín es el tercer productor provincial, y en Tartagal un 85% de la tierra está en manos de estas empresas⁴.

En lo que refiere a la producción petrolera en la zona, ésta atravesó un momento de expansión a partir de los años 1970. Bajo el control de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la actividad conservó las características de una economía de enclave, a la que se incorporaron paulatinamente empresas de capitales privados que firmaron acuerdos con el ente estatal para la perforación de pozos. Llegada la década de 1990 se produjo la privatización de YPF, precedida desde años antes por la implementación de políticas de jubilaciones anticipadas, retiros “voluntarios” y despidos de trabajadores de la empresa: una parte recibió el pago de indemnizaciones, mientras otra fue incorporada a cooperativas laborales encargadas de la prestación de servicios para las empresas privadas del sector. Estas condiciones hicieron al incremento de la cantidad de trabajadores desocupados, tanto en Tartagal como en General Mosconi. Cabe agregar que el proceso de privatización

³ El primer departamento en cantidad de población era Salta Capital, con 373.586 habitantes, según el censo citado. Véase www.estadisticas.salta.gov.ar/archivos/c020101.htm.

⁴ Ver informe de la Universidad Nacional de Salta en: www.unsa.edu.ar/cisen/publicaciones/yacuycompleto.pdf

coincidió con un sostenido aumento de la producción petrolera en la zona de referencia, el cual alcanzó el 87% entre 1993 y 2001⁵.

Gran parte de la población del departamento General San Martín se encontraba en difíciles condiciones para reproducir su existencia en el momento en que se produjeron los primeros cortes de ruta en 1997.

En ese distrito, entre 1991 y 2001 la desocupación pasó de representar el 6,24% sobre el total de la población económicamente activa (PEA) al 19,53%⁶. Otro indicador relevante es el que refiere a la población sin cobertura de salud: si en 1991 el 59,4% de la población total del departamento se encontraba en esa situación, en 2001 el porcentaje alcanzó el 71,8%⁷. Por último, el registro de la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas se mantuvo en altos niveles durante toda la década de 1990: en 1991 fue del 45,6%, mientras que para 2001 apenas había descendido al 40,6%⁸.

Luego de la presentación de este panorama de la situación económico-social en el territorio en donde ocurrió el hecho investigado, pasemos a la descripción y primer análisis del mismo.

El corte de ruta de mayo de 1997

Las protestas en Tartagal hasta el inicio del corte de ruta

⁵Véase <http://www.portaldesalta.gov.ar/economia/hidrocarburos.htm>

⁶En 1991 el total de la PEA en el departamento fue de 36.452 personas, de las cuales se encontraban desocupadas 2.278; diez años más tarde la población activa alcanzó las 85.404 personas, de las cuales estaban sin trabajo 16.683. Datos sobre la provincia de Salta y del departamento Gral. San Martín, extraídos del Censo Nacional 2001 y <http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/iii-cladhe-xxiii-jhe/ponencias/Benclowicz.pdf>

⁷*Ibíd.* En números absolutos, el total de la población de San Martín era en 1991 de 106.688 habitantes; en 2001 había aumentado a 139.204.

⁸Para 1991 los datos fueron tomados de <http://www.oei.es/homologaciones/AnexoVIIIRegionNoroeste.pdf> Otro dato que llama la atención refiere a la calidad de las viviendas en el departamento: en 2001, sólo un 25% de los hogares presentaba materiales resistentes en todos sus elementos constitutivos y de aislación; un 33% de los hogares se caracterizaba por no tener al menos uno de los materiales resistentes y sólidos en sus elementos constitutivos, es decir, se trataba de las viviendas más precarias (INDEC, 2001).

Desde los primeros meses de 1997 se produjeron una serie de protestas, tanto en Tartagal como en General Mosconi, que fueron creando las condiciones que llevaron al corte de ruta de mayo de ese año.

Las protestas en Tartagal comenzaron en marzo, a raíz de la suba de las tarifas de los servicios públicos y la quita de los medidores que tenían aquellos usuarios que estaban endeudados con la compañía distribuidora⁹. La Comisión de Vecinos de Tartagal, creada en ese momento, reclamó al gobierno municipal la realización de obras de infraestructura para solucionar los cortes de energía que comenzaron a ser frecuentes en esa época, así como el arreglo de cloacas, pavimentación de calles y mejoras de las viviendas¹⁰.

En mayo, la Comisión de Vecinos decidió llevar adelante una serie de apagones de protesta así como asambleas populares en la plaza San Martín¹¹. De las asambleas y apagones surgieron delegados de diversos sectores de la población, cada uno de los cuales sumó nuevos reclamos: comerciantes, vecinos, trabajadores desocupados, empresarios y obreros madereros, empresarios agrícolas locales, entre otros. De esta manera, la Comisión empezó a representar múltiples intereses, lo que dio lugar a propuestas divergentes¹².

Las demandas que se sumaron a las iniciales –mencionadas más arriba– refirieron a la situación social y de la actividad económica de la zona, tales como el otorgamiento de planes de trabajo a los desocupados; la reparación de la ruta 34 -arteria vital para la actividad productiva y comercial local -; la realización de obras de infraestructura, el cobro de tarifas preferenciales por zona limítrofe y productora de hidrocarburos y la reinversión de una parte de las regalías por la explotación petrolera en el departamento de General San Martín.

Por otro lado también hubo reclamos hacia los bancos en relación a la refinanciación de las deudas. Tanto los empresarios del campo como gran parte de los vecinos se encontraban endeudados; por ejemplo con el Banco Nación los primeros, mientras que los

⁹ Cabe recordar que en agosto de 1996 el gobierno de la provincia de Salta otorgó la concesión de los servicios de distribución y comercialización de la energía eléctrica a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta SA (EDES SA), en el marco del proceso de entrega al capital privado del control del sistema eléctrico nacional.

¹⁰ “El origen del corte”; en *Página/12*; 10/5/1997.

¹¹ El intendente de Tartagal, Ciriaco Benítez (Partido Justicialista - PJ), se opuso activamente a uno de los mencionados apagones, encendiendo todas las luces de lugares y edificios públicos (*Página/12*, 10/5/1997 y Barbeta, P. y Lapegna, P.; *op. cit.*).

¹² *Página/12*; 10/05/1997; Barbeta, P. y Lapegna, P.; *op. cit.*

segundos se veían en una situación difícil al tener en remate las viviendas que habían comprado gracias a los créditos tomados con el Banco Hipotecario Nacional¹³.

El 7 de mayo un grupo de empresarios agrícolas realizó un “tractorazo” en reclamo de la refinanciación de sus deudas (Laufer y Spiguel, 1999). Al día siguiente, una asamblea organizada por la Comisión de Vecinos reunió a cerca de 2.500 personas en Tartagal: allí los participantes decidieron cortar la ruta 34 a la altura de General Mosconi, en las inmediaciones de las refinerías de petróleo. El intendente Ciriaco Benítez y el diputado provincial Marcelo Abraham, ambos del Partido Justicialista (PJ), intentaron disuadir a los manifestantes, pero no lograron revertir su decisión¹⁴.

Las protestas en General Mosconi antes del inicio del corte de ruta

En esta ciudad las protestas comenzaron el 5 de mayo: ese día, la concejala Graciela Zriki, dirigente del Frente País Solidario (FREPASO) y el periodista Marcelo Jerez¹⁵ iniciaron una huelga de hambre en demanda de una “reparación histórica para el departamento General San Martín”, dirigida tanto a las autoridades de la provincia como a las nacionales¹⁶. Reclamaron por el incumplimiento, por parte del gobierno nacional, del plan de convertir al departamento en zona franca, promesa hecha en 1991 y nunca realizada. También exigieron que las regalías petroleras se distribuyeran en parte dentro del departamento General San Martín, argumentando que la zona era la principal productora del recurso en la provincia.

La falta de respuestas por parte de ambas administraciones generó descontento entre la población de General Mosconi, profundizado por la descompensación que sufrió Jerez a causa del ayuno.

¹³ En esta situación se encontraban unos 500 o 600 vecinos de Tartagal (*Clarín*; 9/5/1997).

¹⁴ En esa asamblea, según el diario salteño *El Tribuno*, “participaron activamente dirigentes sindicales y políticos de izquierda, y periodistas de medios locales (...) hablaron, entre otros, los periodistas Marcelo Jerez y Claudio Sotelo, el dirigente político César Rainieri, del Partido Obrero, y la delegada docente Rosana Franchi de Escolarisi” (*El Tribuno*, 9/5/1997; citado en Benclowicz, J.; *op. cit.*).

¹⁵ En algunas fuentes utilizadas, sobre todo en diarios del momento, aparecen Graciela Zriki con el apellido Williams, presuntamente su apellido de casada, y Marcelo Jerez con el apellido Gerez.

¹⁶ El “fondo de reparación histórica” es un reclamo que llevan a cabo hasta hoy día los pobladores del departamento San Martín, y consiste en el otorgamiento de subsidios y obras de infraestructura para los municipios comprendidos en el mismo, por el hecho de ser una zona que generó históricamente fuertes ingresos para la provincia en términos de regalías hidrocarburíferas.

Inicio del corte de ruta y expansión del conflicto a otras localidades

Como vimos, en la mencionada asamblea del 8 de mayo en Tartagal se decidió el corte de la ruta 34, el que se inició ese mismo día. En la protesta participaron desde el comienzo manifestantes provenientes tanto de Tartagal como de General Mosconi. Ya en la primera jornada cerca de 4 mil y 30 mil personas se hicieron presentes en el lugar¹⁷.

Pero a la vez, desde el inicio se produjo una clara diferenciación social en la protesta. Los manifestantes se organizaron en dos grupos ubicados en puntos diversos en la ruta 34: uno se ubicó a la entrada de la refinería Refinol, propiedad de la empresa Tecpetrol, y fue denominado por los propios manifestantes “Piquete Norte”; el segundo se instaló a 300 metros al sur, cerca de los tanques de reservas de Refinor y otras petroleras, y fue llamado “Piquete Sur”¹⁸. El primero estuvo integrado mayormente por comerciantes y empresarios, y sus referentes eran Jerez y Zriki; mientras que en el segundo predominaron trabajadores desocupados y precarizados¹⁹. Desde el Piquete Norte, Jerez y Zriki exigieron una reunión a realizarse en una iglesia de alguna de las dos localidades, con la participación de representantes de los gobiernos provincial y nacional y con la presencia de periodistas y representantes del clero²⁰.

Los manifestantes unieron demandas como: la reducción de impuestos, la creación de fuentes de trabajo, la no aplicación de la Ley Federal de Educación, el reconocimiento de la propiedad de la tierra para los pueblos originarios de la zona, obras de infraestructura, etc.²¹. El 10 de mayo los participantes en ambos piquetes se reunieron en asamblea y eligieron una Comisión de Diálogo, en la que figuraban Jerez y los dirigentes de desocupados Juan Nieves y José Barraza²².

¹⁷Ver el film documental *Mosconi* (Riposati, 2011) y *El Tribuno*, 9/5/97; citado en Benclowicz, J.; *op. Cit.*

¹⁸Barbetta, P. y Lapegna, P.; *op. cit.* Según una descripción periodística, “600 metros se han convertido en una especie de paseo, manifestación política, romería y acto para la mayoría de la población de Tartagal y Mosconi” (*Página 12*; 10/5/1997).

¹⁹Según fuentes periodísticas (*Página 12*, 18/5/1997), al Piquete Sur se sumaron referentes de la cultura y el deporte local (murgueros y boxeadores, entre otros).

²⁰*La Nación*; 9/5/1997.

²¹*La Nación*; 9/05/1997; *Página 12*; 18/5/1997; Benclowicz, J.; *op. cit.*; y video documental *Mosconi*.

²²Ver Laufer, R. y Spiguel, C.; *op. cit.* Nieves era uno de los referentes de la Unión de Trabajadores Desocupados en General Mosconi; Barraza era dirigente del Partido Obrero.

A su vez se registraron cortes en otras localidades del departamento General San Martín como Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación y Cornejo.

Las negociaciones

El 10 de mayo, luego de dos jornadas de protesta, comenzaron las negociaciones entre los manifestantes y los funcionarios del gobierno provincial. Las negociaciones comenzaron primero con el ministro de Seguridad César Nazario y luego con el ministro de Producción y Trabajo Gilberto Oviedo, sin llegar a acuerdos.

Los temas en discusión giraron en torno a la propuesta realizada por el gobierno salteño. Ésta incluía la incorporación de mil trabajadores al programa Trabajar, la rebaja de las cuotas que debían pagar aquellos que estaban por perder sus casas, subsidios por desempleo, la construcción de una nueva terminal de ómnibus y la reparación del aeropuerto y de las rutas 34, 86 y 81. Los manifestantes consideraron esto insuficiente, y reclamaron en cambio cinco mil planes de empleo²³.

El 11 de mayo llegó a la zona el obispo de Orán Mario Cargnello, quien trató mediar en el conflicto²⁴.

Entre el 11 y el 13 el gobierno provincial sostuvo su propuesta. Al mismo tiempo el gobierno nacional, por intermedio del ministro Corach, se reunió con representantes de las empresas petroleras logrando un acuerdo que incluía los siguientes puntos: la construcción de una usina eléctrica en Campo Durán a cargo de la empresa Refinol, emprendimiento que debía generar cien puestos de trabajo; la autorización para construir un gasoducto a Chile, con una inversión de 800 millones de dólares y la creación de entre 600 y 800 puestos de trabajo; la instalación de tres equipos de perforación y una nueva planta de tratamiento de gas, y la intensificación de tareas de prospección sísmica en Aguaray, lo que implicaba la creación de entre 400 y 500 puestos de trabajo²⁵.

²³ “El gobierno de Salta ofrecía incorporar 1000 trabajadores a través del programa Trabajar, del Ministerio de Trabajo, para realizar tareas comunitarias por 200 pesos mensuales. Además, se renovarían por seis meses otros programas otorgados anteriormente. Los manifestantes se opusieron tajantemente. Reclaman 5000 puestos laborales, por lo menos, en una primera etapa (*La Nación*; 11/5/97).

²⁴ *Clarín*; 12/5/1997.

²⁵ *Página 12*; 13/5/1997.

A la vez, las autoridades del ejecutivo nacional comenzaron a desplegar la hipótesis de la intervención externa como causa de la protesta²⁶. Esto constituyó el primer paso para que, pocos días después, se hiciera la advertencia respecto a una eventual represión. Según el mismo presidente Carlos Menem, "hay dos caminos: o negociar como se está haciendo, que es una de las últimas oportunidades, o poner las fuerzas de seguridad al servicio de la ley"²⁷.

Por otra parte dirigentes de partidos de la oposición provincial, como la Unión Cívica Radical (UCR), el FREPASO y el Partido Renovador de Salta (PRS), se reunieron en la ciudad capital para buscar puntos de acuerdo en la solución del conflicto: así, consideraron la propuesta de que el gobierno provincial derivase las regalías petroleras a los municipios en forma directa.

Las negociaciones definitivas entre los manifestantes y los funcionarios se desarrollaron en dos reuniones, los días 12 y 13 de mayo. Para ese entonces, los primeros ya habían elaborado un pliego de cuarenta puntos con demandas tales como obras de infraestructura, creación de puestos de trabajo, reparación de escuelas, hospitales y atención a las exigencias propias de la comunidad wichí, entre otras. También reclamaban por el Fondo de Reparación Histórica para el departamento de General San Martín, por la distribución de las regalías petroleras y gasíferas, la declaración como zona franca de la ciudad de General Mosconi y la sanción en el plazo de un mes de la Ley de Área de Frontera²⁸.

El gobierno provincial realizó una nueva oferta vinculada a la generación de empleo. Consistió en el otorgamiento de mil fondos de desempleo de doscientos pesos mensuales por el plazo de un año; dos mil puestos de trabajo del Plan Emergencia, también por un año y con un pago de doscientos pesos por mes; y mil Planes Trabajar de seis meses de vigencia y un pago por el mismo monto. Además contemplaba la creación, en un plazo de tres

²⁶*Página 12*; 10/5/1997. El brigadier Andrés Antonietti, secretario de Seguridad de la Nación, aseguró que el juez federal Abel Cornejo le "pidió la colaboración de Gendarmería": una patrulla del escuadrón 20 de Orán, que no tenía jurisdicción en la zona, hizo un control de personas que se dirigían hacia General Mosconi (*Clarín*; 12/5/1997).

²⁷*Clarín*; 14/5/1997.

²⁸*Página 12*, 13/5/1997. En relación a la Ley de Área de Frontera, lo que exigían los manifestantes era la regulación de la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en zonas de frontera. Esto se debía a que, tal como denunciaron dirigentes de la UTD de Mosconi, en ese momento –al igual que hoy– empresas petroleras y agrícolas extraían los recursos de la zona, expropiaban la tierra a los pueblos originarios y no creaban fuentes de empleo para la población local (*Clarín*; 16/10/2005).

meses, de otras fuentes de trabajo con financiamiento del estado nacional. Por último, incluía la exención de impuestos provinciales, la creación de 1.400 puestos de trabajo privado en el sector petrolero y diversas medidas relacionadas con la salud y la educación²⁹.

Luego de la reunión del 12, los manifestantes realizaron una asamblea que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente. Allí pudieron observarse diferentes posturas entre los participantes. Una parte de ellos, concentrados en el Piquete Norte y cuya expresión fue Jerez, se pronunció a favor de aceptar la oferta oficial y por poner fin a la protesta, mientras que los manifestantes del Piquete Sur, organizados en la UTD de General Mosconi y cuyo portavoz era Nievas, se pronunciaron en contra de esa posibilidad y rechazaron la propuesta por considerar que no resolvía el problema del empleo.

Mientras tanto el juez federal Abel Cornejo, magistrado a cargo de la causa abierta por el corte de ruta, puso en alerta a la gendarmería para desalojarlo en caso de no que se llegase a una resolución negociada del conflicto³⁰.

Final del conflicto y acuerdo definitivo con las autoridades

El 14 de mayo los manifestantes llegaron a un acuerdo definitivo con las autoridades que puso fin al corte de ruta. El acuerdo pautado consistió en fondos de desempleo para mil personas, por el plazo de un año, de 220 pesos mensuales; el otorgamiento de 2.500 Planes Trabajar; la creación de 1.426 puestos de trabajo en petroleras privadas como Astra, Pluspetrol y Tecpetrol; el pago, en el plazo de diez días, de uno de los tres meses de salarios adeudados a los empleados municipales de Tartagal; la creación de un fondo provincial de inversiones de cinco millones de dólares; la duplicación del presupuesto para los comedores escolares y su instalación en las escuelas que no los tuvieran; el reconocimiento de un plazo de diez años a los deudores del Banco Nación y la ampliación del plazo necesario para pagar las cuotas vencidas del Banco Hipotecario; el no descuento de los jornales a los maestros que adhirieron a la protesta; la entrega de tierras fiscales a comunidades aborígenes; el otorgamiento de créditos y tierras fiscales a los sectores maderero y agropecuario; y la inversión de cuatro millones de pesos en la construcción de viviendas; el

²⁹La Nación; 14/5/1997.

³⁰La Nación; 12/5/1997.

compromiso del gobierno nacional de exceptuar el pago de algunos impuestos por zona de frontera³¹.

Formas de organización e intereses de los manifestantes

Las formas de organización e intereses de los participantes, se pueden describir acorde a los dos grupos que se constituyeron en el corte de ruta de mayo de 1997: el “Piquete Norte” y el “Piquete sur”, denominado por los propios manifestantes.

El Piquete Norte

El “Piquete Norte” fue organizado por vecinos, comerciantes, docentes³², trabajadores de la salud pública³³, diputados, periodistas y otros profesionales. Dentro de este sector existieron diferentes organizaciones, de las cuales la que más se destacó fue la Comisión de Vecinos de Tartagal, organización que en principio reclamo obras de infraestructura y después sumo reclamos generales mencionados de la totalidad de los manifestantes que participaron.

En el Piquete Norte cumplieron un rol destacado cuadros políticos pertenecientes a partidos de la oposición oficial a los gobiernos provincial y nacional, activos en el contexto electoral abierto hacia las próximas elecciones legislativas: tales fueron los casos de la concejala Graciela Zriki del FREPASO y el intendente de General Mosconi Isidro Ruarte y el diputado provincial Andrés Zottos, ambos del PRS.

El Piquete Sur

³¹Clarín y Página 12; 15/5/1997.

³² Uno de los cuadros dirigentes de los docentes que participaron en este piquete fue César Raineri, militante del Partido Obrero (PO) (Benclowicz; *op. cit.*; y <http://tribunadocente.com.ar/tribuna58/ocho.htm>).

³³ Entre los trabajadores de la salud pública se destacó la participación del médico Tomás Santich, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

El “Piquete Sur” fue el lugar integrado por los obreros, sobre todo los desocupados. Estos manifestantes se encontraban organizados en la UTD y en partidos de izquierda, entre ellos el Partido Obrero (PO)³⁴.

La UTD se constituyó en 1996 con el objetivo de luchar para garantizar el acceso al empleo a los trabajadores desocupados, principalmente aquellos que habían desempeñado tareas en YPF. Buena parte de los dirigentes de la UTD tuvieron experiencias de lucha en el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), por lo menos desde la década de 1980³⁵.

Al sumarse al corte de ruta de 1997, la UTD reivindicó las demandas de puestos de trabajo para todos los desocupados, el pago de la jubilación anticipada adeudada tras la privatización de YPF, el otorgamiento de tierras fiscales y maquinarias y equipos de perforación para trabajar en la explotación petrolera³⁶.

La asamblea

La asamblea fue la instancia de unidad de los participantes en el corte de ruta, integrando demandas interpeladas a los distintos gobiernos sobretodo provincial y nacional.

Durante el transcurso de la protesta se registraron diferencias al interior de la asamblea entre los representantes de ambos piquetes: mientras que los del Norte fueron proclives a negociar con las autoridades un acuerdo basado principalmente en la realización de obras públicas, los del Sur se mostraron partidarios de continuar con el corte hasta lograr mejoras en la oferta de creación de puestos de trabajo en las empresas petroleras, así como el otorgamiento de planes sociales y el pago de subsidios por desempleo.

Las respuestas desde el sistema institucional

³⁴Ya hemos mencionado a José Barraza: luego del corte de ruta, éste integró la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal-Polo Obrero (CTD-PO), organización que participó en cortes posteriores, como los del año 2001 (Benclowicz; *op. cit.*).

³⁵ Muchos de ellos, han llegado a ganar la seccional del sindicato de Vespucio, bajo una lista opositora (Lista Blanca), y organizaron la toma del aeropuerto de General Mosconi en 1988 en rechazo a la privatización de YPF. Luego ya en 1991, crearon la “Asociación de Trabajadores Ex-ypefianos contra la privatización” organizado el primer corte de ruta contra la política de privatización de esta empresa. (Benclowicz;*op. cit.*). En la Asociación tuvieron participación dos destacados dirigentes de la UTD a partir de 1996: Juan Nievas y Rodolfo Peralta. Cabe agregar que Nievas militó en el Partido Comunista y luego en la Corriente Clasista Combativa (CCC).

³⁶<http://www.lafogata.org/003arg/arg8/arg3.htm>.

Tras el desarrollo de la protesta, las distintas organizaciones del sistema institucional fueron tomando posturas.

Por su parte, los gobiernos municipales, con el intendente de Tartagal, Ciriaco Benítez, que se opuso al corte de ruta e intentó convencer a los manifestantes de que desistieran de la protesta; y el intendente de General Mosconi, Isidro Ruarte, del opositor PRS, que por el contrario se sumó al corte³⁷.

En cuanto al gobierno provincial, este se opuso a la protesta desde su inicio: el gobernador Juan Carlos Romero ha acusado a los manifestantes de no querer trabajar, de cometer un delito federal³⁸.

Al mismo tiempo, se registró la participación en el corte de dirigentes locales de partidos políticos de la oposición a los gobiernos provincial y nacional³⁹.

En lo que hace al gobierno nacional, el presidente Carlos Menem, planteó dos posiciones simultáneas frente a la protesta. Por un lado, él reconoció la necesidad de los reclamos y responsabilizó a los gobiernos provincial y municipal por no satisfacerlos e impedir el conflicto⁴⁰. Pero a la vez marcó la posible presencia de supuestos grupos “infiltrados” en el corte de ruta⁴¹. Posteriormente, Menem advirtió que en caso de que no llegar a un acuerdo, habrá represión por medio de las fuerzas de seguridad⁴². Similar posición asumió el ministro del Interior Corach⁴³.

Acerca de la intervención del sistema judicial, se destacó el juez federal Abel Cornejo⁴⁴. Cornejo llamó en principio a la negociación con los manifestantes; pero cuando

³⁷El Partido Renovador de Salta nació en el marco de la transición de la dictadura cívico-militar al gobierno surgido de elecciones. Esta fuerza política fue conformada por cuadros que habían ocupado cargos en el gobierno militar en la provincia de Salta, en especial quien fuera gobernador entre 1977 y 1983, Roberto Ulloa. También sumó a dirigentes de partidos tales como Movimiento Federal 17 de Octubre, Movimiento Popular Salteño, Partido Conservador Popular y Unión Provincial. Entre 1991 y 1995 el Partido Renovador detentó el ejecutivo provincial, encabezado por Ulloa.

³⁸*Clarín*; 9/5/1997. *La Nación*; 9/5/1997.

³⁹Tales son los casos de Ruarte, y del entonces diputado provincial Andrés Zottos, del Partido Renovador de Salta (PRS), y el de la concejala Graciela Zriki, del Frente País Solidario (FREPASO)

⁴⁰*Página 12*; 10/5/1997.

⁴¹*Página 12*; 10/5/1997.

⁴²*Clarín*, 14/5/1997.

⁴³*La Nación*; 14/5/1997.

⁴⁴Juez federal entre 1993 y 2008, Abel Cornejo pasó a ocupar desde entonces un cargo en la corte de justicia salteña. Desde 2013 es representante del poder judicial ante la comisión provincial para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

se llegaba a acuerdos entre las partes, pasó a amenazar a los manifestantes con represión y poner fin al corte de ruta⁴⁵.

La iglesia católica, también intervino con un rol protagónico en la protesta a través de la mediación del obispo de Orán, Mario Cargniello, quien cuestionó a los distintos gobiernos de responsables de la pobreza y les imploro a los manifestantes concretar acuerdos.

Las organizaciones del movimiento sindical, de la que solo hemos registrado la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT) dirigida por Rodolfo Daer, sumó su respuesta al corte al manifestar su solidaridad con los manifestantes, y pedirle al gobierno nacional que no reprimiera⁴⁶.

Resultados de esta etapa investigación

A partir de la precedente descripción del corte de ruta de Tartagal y General Mosconi, podemos adelantar los primeros resultados del trabajo de investigación.

Este corte de ruta-ocurrido en un territorio caracterizado por sus estructuras económico-sociales de capitalismo de economía privada con peso del campo y capitalismo de enclaves (Iñigo Carrera, Podestá y Cotarelo, 1994)-, consistió en un hecho en el que las demandas parciales de sus protagonistas apuntaron a poner un límite al avance de las políticas del capital financiero y a preservar y/o recuperar espacios sociales para las fracciones participantes en la protesta. Pues refirieron generalmente al reclamo de obras de infraestructura, tarifas preferenciales y refinanciación de deudas por parte de los empresarios y pequeños propietarios; y de empleos, subsidios y alimentos por parte de los trabajadores desocupados.

A la vez, este presentó semejanzas con otros, en el los que también se recurrió al instrumento del corte de ruta, como el caso de Cutral Có y Plaza Huincul, Neuquén, en 1996 y 1997, desatancándose la participación de alianza de diversas fracciones sociales,

⁴⁵Fue en ese momento cuando Cornejo afirmó, en relación a la actitud de los trabajadores desocupados, que "es evidente que aquí hay personas que no quieren que se le dé una solución definitiva al conflicto" (*Clarín*; 14/5/1997).

⁴⁶*Página/12*; 14 /5/1997.

pero bajo la iniciativa demostrada por los trabajadores asalariados, ocupados o desocupados. En el caso salteño, existió una diferenciación de intereses que tomo la forma espacial con la formación de los piquetes sur y norte, donde los trabajadores asalariados (instalados mayoritariamente) en el piquete sur manifestaron una mayor predisposición al enfrentamiento y a continuar la protesta, respecto a las fracciones de los propietarios de sus condiciones materiales de existencia⁴⁷.

Pese a lo mencionado, en la asamblea se articularon los reclamos y debates entre los diversos grupos. En ella se logró un cierto grado de unidad, a través de la formación de distintas comisiones (incluida la comisión de diálogo), más allá de que hacia el final de la protesta se evidenció una tendencia hacia la polarización de posiciones encontradas, por la propuesta de los trabajadores desocupados de continuar con el corte, al no considerar satisfactoria la oferta del gobierno provincial respecto a la creación de empleos. Postura que no fue acompañada, por los representantes de los empresarios y pequeños propietarios, en un contexto de amenaza de represión de las autoridades políticas y el sistema judicial.

En la asamblea, pues estaban representados intereses de fracciones sociales diversas, algunas bajo una forma previa de organización, como la Comisión de Vecinos de Tartagal y la Unión de Trabajadores Desocupados. Pero además la integraron quienes ya venían llevando adelante conflictos como intereses de grupo: los trabajadores del gremio docente y las comunidades wichí de la zona.

Por surgir en el desarrollo de la protesta y rescatando los procedimientos “horizontales” en la toma de decisiones, la asamblea se encontraba por fuera del sistema institucional político, más allá de la activa participación dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales. Y es en esta donde los manifestantes se dirigieron hacia las autoridades de los diversos niveles del gobierno –municipal, provincial y nacional- para presentar sus reclamos y abrir con ellos una instancia de negociación. Tras la apelación al gobierno y a su intervención fue las que le dieron a la protesta un carácter político, independientemente de la agregación de demandas económicas-corporativas de las fracciones que participaron.

Adicionalmente, la intervención de cuadros políticos opositores a los gobiernos de turno, como el FREPASO o el PRS, reflejaron la centralidad que iba tomando la lucha

⁴⁷ Véase al respecto el ya mencionado film documental *Mosconi*.

político-electoral de cara a los próximos comicios legislativos. Para el hecho investigado, en ese sentido podría encontrarse, un indicador que hace al pasaje de un momento de ascenso a otro de descenso en la lucha de los obreros a nivel general, cuando la alternativa electoral comenzó a darle el tono al proceso político. A lo que se suma la situación de aislamiento que afectó a partir de entonces y durante dos años a la clase obrera, que se manifestó puntualmente en este corte de ruta, a raíz de la falta de apoyo a los trabajadores participantes –en especial los desocupados- por parte de organizaciones sindicales, incluidas las centrales sindicales.

Un próximo paso de la investigación será el análisis comparativo entre el corte de ruta de 1997 con los ocurridos también en Tartagal y General Mosconi en 1999 y 2001, observando la participación de las diversas fracciones sociales, sus demandas e intereses y los grados de unidad y ruptura dentro del desarrollo de los mismos, así como su articulación con el proceso más general de la rebelión.

Bibliografía

- Barbeta, P. N. y Lapegna, P. (2003). La protesta social en la Argentina en la década de los noventa: “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el Norte salteño”. *Instituto Argentino para el Desarrollo Económico*. Recuperado de <http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=264>
- Benclowicz, J. (2006). La izquierda y la emergencia del movimiento piquetero en la Argentina. Análisis de un caso testigo. *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, 37, 123-143. Recuperado de <http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/ppperiod/espinal/espinalpdf/espinal37/123-143.pdf>
- Benclowicz, J. (octubre, 2012). YPF y economías de enclave: entre el estado de bienestar y el estado de malestar. En *Tercer Congreso Latinoamericano de Historia Económica. XXIII Jornadas de Historia Económica de la AAHE*. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, Argentina. Recuperado de <http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/iii-cladhe-xxiii-jhe/ponencias/Benclowicz.pdf>
- Iñigo Carrera, N., Podestá J. y Cotarelo M. C. (1994). *Las estructuras económico sociales concretas que constituyen la formación económica de la sociedad argentina* (Documentos de Trabajo N° 1). Buenos Aires: PIMSA.
- Iñigo Carrera, N. y Podestá, J. (1997); *Las nuevas condiciones en la disposición de fuerzas objetiva. La situación del proletariado*. Buenos Aires: PIMSA.
- Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (1998). *Los llamados “cortes de ruta”. Argentina 1993-97*. Buenos Aires: PIMSA.
- Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2000). *La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización*. Buenos Aires: PIMSA.
- Laufer, R., Spiguel, C. (1999). Las "puebladas" argentinas a partir del "santiagueñazo" de 1993. Tradición histórica y nuevas formas de lucha. En López Maya, M. Editora, *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*. Recuperado de <http://rubenlaufer.blogspot.com.ar/2010/04/las-puebladas-argentinas-partir-del.html>

- Tejerina, M. E., Bianchetti, G. y Justiciano, M. F. (2003). La recuperación de la democracia: El Partido Renovador de Salta, ¿Herencia del proceso militar? *Escuela de Historia*, 2. Recuperado de <http://www.researchgate.net/publication/28103241> La recuperacin de la demogra
cia el partido renovador de Salta herencia del proceso militar
- Svampa, M. et al. (2002). *Movimientos sociales en la Argentina de hoy. Piquetes y asambleas. Tres estudios de caso*. Segunda parte, Buenos Aires, CEDES.

Fuentes

- Características socioeducativas y de la oferta de educación superior en la región noroeste (NOA). *Organización de Estados Iberoamericanos*. Recuperado de <http://www.oei.es/homologaciones/AnexoVIIIRegionNoroeste.pdf>
- Del Plá, C. Todos Por La libertad De Cesar “Perico” Raineri (28 de junio de 2001). *Tribuna Docente*. Recuperado de <http://tribunadocente.com.ar/tribuna58/ocho.htm>
- Diario *Clarín* (del 8 al 20 de mayo 1997).
- Diario *La Nación* (del 8 al 20 de mayo de 1997).
- Diario *Página 12* (del 8 al 20 de mayo de 1997)
- Di Giusto, N. y Riposati, L. (Productores) y Riposati, L. (Directora). (2011): *Mosconi* [Película]. Colección de documentales INCAA. Argentina: El Camino Cine/Miguel Colombo.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2001). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2001*. Recuperado de http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/
- La actividad hidrocarburífera: gas & petróleo. *Portal de Salta*. Recuperado de <http://www.portaldesalta.gov.ar/economia/hidrocarburos.htm>
- Página del *Gobierno de la provincia de Salta*. Recuperado de <http://www.salta.gov.ar/organismos/funcionarios/vicegovernador-vicegovernacion/2>
- Página del *Gobierno de la Provincia de Salta*. Recuperado de <http://www.estadisticas.salta.gov.ar/archivos/c020101.htm>.
- Página del *Poder Judicial de Salta*. Recuperado de <http://www.justiciasalta.gov.ar/abel-cornejo-salta.php>

- Página de *La Fogata*. Recuperado de <http://www.lafogata.org/003arg/arg8/arg3.htm>
- Página de la *Universidad Nacional de Salta*. Recuperado de <http://www.unsa.edu.ar/cisen/publicaciones/yacuycompleto.pdf>
- Prensa Obrera (25 de mayo de 2000). “La pueblada de Tartagal y Mosconi. La victoria de un gran levantamiento popular. Por un Congreso de Trabajadores”, *Prensa Obrera* (666). Recuperado de <http://prensa.po.org.ar/archivo/po/po666/la.htm>